Señores.

**JUZGADO SEGUNDO (2°) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI**

[j02cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

|  |  |
| --- | --- |
| **REFERENCIA:** | PROCESO VERBAL |
| **RADICADO:** | 760013103002-**2024-00231**-00 |
| **DEMANDANTE:** | JOAQUÍN ALFONSO NARANJO RODRÍGUEZ Y OTROS |
| **DEMANDADOS:** | NANCY JANETH HINESTROZA GASPAR Y OTROS |

**ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA**

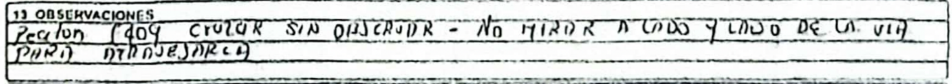
**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de Apoderado Especial de **HDI SEGUROS S.A.**, de conformidad con poder adjunto. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, a través de este acto procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** promovida por JOAQUIN ALFONSO NARANJO RODRIGUEZ Y OTROS en contra de HDI SEGUROS S.A**.** Y OTROS, anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

# CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

## FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

**FRENTE AL HECHO 1:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por HDI SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin embargo, una vez analizadas las documentales obrantes en el plenario del proceso, se observa que es cierto según el Informe Policial de Accidente de Tránsito allegado al proceso, que el accidente que dio origen al presente litigio ocurrió el 22 de septiembre de 2022 en la Calle 15 Carrera 37 – 44 Cali - Yumbo Neiva – Castilla en el Kilómetro 20 + 700 metros, a las 19:40 horas. No obstante, cabe precisar que como quedo constatado en el referido informe, la hipótesis del accidente atendió a la causal No. 409 *“Cruzar sin observar - No mirar a lado y lado de la vía para atravesarla”*, atribuible a la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, como se observa:



Por lo tanto, debe advertirse desde ya que no será posible declarar responsabilidad alguna a los demandados en este proceso, puesto que al determinarse la responsabilidad que obra en cabeza de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez operó la causal exonerativa de responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima”, en tanto que expuso imprudentemente su vida al cruzar la vía en una zona no habilitada para ello, en la mitad de la noche.

**FRENTE AL HECHO 2:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por HDI SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO 3:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por HDI SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

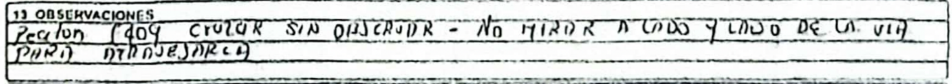
**FRENTE AL HECHO 4:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por HDI SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

Sin embargo, de acuerdo al Informe Policial de Accidente de Tránsito allegado, se tiene que para el momento de los hechos la señora Paola Andrea Córdoba Hinestroza era la conductora del vehículo HMM-905.

**FRENTE AL HECHO 5:** Se observa que lo aquí expuesto es cierto de acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso.

**FRENTE AL HECHO 6:** De la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias afirmaciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

* No es cierto que el vehículo de placas HMM-905 causa el accidente configurado el 22 de septiembre de 2022, pues de acuerdo a lo señalado el Informe de Accidente de Tránsito, el hecho acaeció como consecuencia de la conducta asaz e imprudente desplegada por la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, quien cruzó la vía sin precaución como se puede observar a continuación en el siguiente extracto del informe policial de accidentes de tránsito adosado al plenario:



Se concluye entonces que la causa determinante del acaecimiento del hecho obedece a que el actuar imprudente y negligente señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.), configuró la hipótesis 409 “*Cruzar sin observar - No mirar a lado y lado de la vía para atravesarla*”. De modo que no es cierto el argumento de la parte demandante, en el que señala que el accidente fue causado por imprudencia del conductor Rodrigo Morales Ruiz, pues las pruebas obrantes dan cuenta de todo lo contrario.

De igual manera, según Dictamen Pericial de Reconstrucción de Accidente de Tránsito No. 5826 emitido por CESVI COLOMBIA y que se acompaña con esta contestación, se establece que el suceso se generó en razón a que:

*“(…) 1. Con base en la información aportada y dado que el accidente es físicamente inevitable para el conductor del automóvil se establece como la causa determinante del accidente que no se tomaron* ***las medidas de seguridad necesarias al momento de realizar el cruce por parte de la peatona****.”*

En virtud de esta información, se evidencia que el accidente se configuró por el actuar imprudente y negligente de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.), quién transgredió los artículo 57 y 58 del Código Nacional de Tránsito, pues estas disposiciones establecen claramente las obligaciones de los peatones, entre ellas la de cruzar únicamente por las zonas designadas y respetar las normas de tránsito, especialmente en vías de alto flujo vehicular. Al infringir estas normativas, se atribuye responsabilidad en el siniestro a la señora Naranjo, ya que su conducta desatendió el deber de cuidado que exige la ley, exponiéndose así a un riesgo evitable..

* De igual manera, no se acepta la utilización del término *siniestro* empleado por el apoderado del extremo actor, habida cuenta de acuerdo a lo consagrado en el Código de Comercio, el siniestro es la realización del riesgo asegurado. Teniendo en cuenta lo anterior, no podemos hablar de siniestro en el presente caso, ya que no se encuentra en ningún momento acreditada la realización del riesgo asegurado por mi representada, es decir, no se probó la responsabilidad civil extracontractual del vehículo HMM-905. El IPAT evidencia que no existió responsabilidad del vehículo asegurado en la ocurrencia del accidente que es la base de este proceso judicial, sino que este se produjo debido al actuar imprudente de la víctima, por lo que no es posible hablar de la materialización de un siniestro.
* Es cierto que mi procurada amparaba la responsabilidad civil extracontractual derivada de la conducción del vehículo de placa HMM-905 para el momento de ocurrencia de los hechos, de conformidad con la póliza de seguro de automóviles No. 4227743, es importante aclarar que la misma no opera de forma automática, pues la existencia de un contrato de seguros no implica *per se* el surgimiento de obligación indemnizatoria en cabeza de mi representada, toda vez que se debe cumplir en primer lugar, con la acreditación de que el hecho dañino haya devenido de forma exclusiva del proceso de conducción ejecutado por el asegurado, en segundo lugar, que se encuentre probada la estructuración de la responsabilidad civil durante la vigencia de la póliza y, en tercer lugar, que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro.

Sin embargo, en este caso, es patente que no es posible la afectación de la póliza por cuanto no se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta y el daño deprecado por los accionantes, por el contrario, las documentales adosadas y las que se harán llegar al plenario acreditan la existencia del hecho exclusivo de la víctima en la producción del evento reprochado por el extremo accionante. Por consiguiente, no se probó por el extremo actor la responsabilidad en cabeza de la pasiva de la acción, y con ello, tampoco, el acaecimiento del riesgo asegurado en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio.

**FRENTE AL HECHO 7:** No es cierto, pues se evidencia que las afirmaciones realizadas por el extremo actor son afirmaciones temerarias que carecen de cualquier sustento probatorio. Máxime cuando no es evidente que ni la parte ni su apoderado, cuentan con la experticia o los conocimientos técnicos necesarios para realizar juicio de valor sobre las conductas adelantas por la autoridad competente, quien constante de manera clara la hipótesis del accidente en un documento que goza de presunción de legalidad, esto es en el Informe Policial de Accidente de Tránsito.

En cualquier caso, se reitera que todo lo concerniente al evento de tránsito ocurrido el 22 de septiembre de 2022, ocurrió por el hecho exclusivo de la víctima, en ocasión a las acciones imprudentes desarrolladas por la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.) a la hora de cruzar la vía en una zona no habilitada para ello, pues en la misma no existe paso peatonal. Particularmente se destaca que en el IPAT se establece el accidente tuvo lugar debido a la culpa de la víctima, la señora Naranjo Domínguez, al cruzar sin observar, sin que se constate que la parte demandante hubiera iniciado alguna actuación administrativa o cualquier otra tendiente a la modificación de las conclusiones que se plantean en este documento. Por lo tanto, no resulta válido que ahora se intente cuestionar la veracidad del IPAT, cuando no consta que el demandante haya solicitado o promovido una corrección del mismo.

Adicionalmente, es importante señalar que la prueba técnica presentada por la parte demandante contiene múltiples errores y omisiones que afectan su validez. En primer lugar, dicha prueba no analiza la conducta de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, quien, en horas de la noche, intentó cruzar una autopista de alto flujo vehicular, exponiéndose de manera imprudente al riesgo de accidente. Además, el informe parece asumir una supuesta distracción por parte de la conductora del vehículo HMM-905, sin que exista una sola evidencia en el expediente que respalde dicha afirmación. En lo que es más, dentro de ese mismo documento en su página 37, se dispone que en efecto la vía por donde la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez no tiene paso peatonal alguno, sino que el riesgo era imprevisible para la conducta Paola Andrea Córdoba Hinestroza, pues no hay manera de que tuviera una percepción del riesgo. Estos elementos resultan relevantes, ya que ignoran factores fundamentales de autoprotección y responsabilidad que pueden influir en el análisis de los hechos y, en consecuencia, en la determinación de la responsabilidad en este caso.

**FRENTE AL HECHO 8:** Lo aquí expuesto no es un hecho, sino apreciaciones subjetivas que carecen abiertamente de sustento probatorio. En todo caso, se reitera que todo lo concerniente al evento de tránsito ocurrido el 22 de septiembre de 2022, ocurrió por el hecho exclusivo de la víctima, en ocasión a las acciones imprudentes desarrolladas por la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez a la hora de cruzar la vía. Particularmente se destaca que en el IPAT se establece el accidente tuvo lugar debido a la culpa de la víctima, la señora Naranjo Domínguez, al cruzar sin observar, sin que se constate que la parte demandante hubiera iniciado alguna actuación administrativa o cualquier otra tendiente a la modificación de las conclusiones que se plantean en este documento. Por lo tanto, no resulta válido que ahora se intente cuestionar la veracidad del IPAT, cuando no consta que el demandante haya solicitado o promovido una corrección del mismo.

Adicionalmente, es importante señalar que la prueba técnica presentada por la parte demandante contiene múltiples errores y omisiones que afectan su validez. En primer lugar, dicha prueba no analiza la conducta de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, quien, en horas de la noche, intentó cruzar una autopista de alto flujo vehicular, exponiéndose de manera imprudente al riesgo de accidente. Además, el informe parece asumir una supuesta distracción por parte de la conductora del vehículo HMM-905, sin que exista una sola evidencia en el expediente que respalde dicha afirmación. En lo que es más, dentro de ese mismo documento en su página 37, se dispone que en efecto la vía por donde la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez no tiene paso peatonal alguno, sino que el riesgo era imprevisible para la conducta Paola Andrea Córdoba Hinestroza, pues no hay manera de que tuviera una percepción del riesgo. Estos elementos resultan relevantes, ya que ignoran factores fundamentales de autoprotección y responsabilidad que pueden influir en el análisis de los hechos y, en consecuencia, en la determinación de la responsabilidad en este caso.

**FRENTE AL HECHO 9:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por HDI SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

**FRENTE AL HECHO 10:** No es cierto, pues tal como ha sido altamente reiterado, recae sobre la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D) la responsabilidad del accidente, en tanto fue quien cruzó la vía sin precaución, en una zona en donde dicha conducta está completamente prohibida y desatendiendo las medidas mínimas necesarias de prevención y seguridad, es decir que, de manera voluntaria, fue la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez quien asumió un riesgo que a la postre se materializó en sus lesiones, pues decidió cruzar una vía en la cual su conducta no era permitida, violando las normas de tránsito existentes, siendo que el mismo fue el generador de la situación de peligro para el bien jurídico de la vida e integridad personal.

Debe decirse entonces que el accidente hubiese podido evitarse si la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, hubiese atendido a las normas de tránsito que regulan el comportamiento de los conductores en la vía, puesto que el Código Nacional de Tránsito en su artículo 56 y 57, dispone las normas generales para peatones de esta manera:

“***ARTÍCULO 57. CIRCULACIÓN PEATONAL.*** *El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos.* ***Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo****.” (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

***“ARTÍCULO 58. PROHIBICIONES A LOS PEATONES:*** *Los peatones no podrán:*

*(…)*

***4. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física****.*

***5. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales.”***  *(Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

De manera que el accidente no podrá atribuírsele a los demandados en este proceso, como quiera que es claro que el mismo acaeció como consecuencia de una conducta imprudente de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, quien gestó la causa de sus lesiones configurando la causal excluyente de responsabilidad denominada “hechos exclusivo de la víctima”.

**FRENTE AL HECHO 11:** No se trata de un hecho sino de una apreciación subjetiva y jurídica que hace el apoderado de la parte demandante. No obstante, lo expuesto por la parte actora no tiene la virtualidad de acreditar la responsabilidad que tanto reprocha, pero que nunca demuestra. Se reitera, todo lo concerniente al evento de tránsito ocurrido el 22 de septiembre de 2022 ocurrió por el hecho exclusivo de la víctima, es decir, en vista de las maniobras imprudentes de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez. Lo anterior, según lo establecido tanto en el IPAT como el Informe de Reconstrucción de Accidente de Tránsito (RAT) emitido por la entidad de control vial CESVI COLOMBIA, en el que se deja de manera explícita que el accidente tuvo lugar debido a la culpa de la víctima, pues su conducta fue completamente negligente a la hora de cruzar la vía.

Adicionalmente, es importante señalar que la prueba técnica presentada por la parte demandante contiene múltiples errores y omisiones que afectan su validez. En primer lugar, dicha prueba no analiza la conducta de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, quien, en horas de la noche, intentó cruzar una autopista de alto flujo vehicular, exponiéndose de manera imprudente al riesgo de accidente. Además, el informe parece asumir una supuesta distracción por parte de la conductora del vehículo HMM-905, sin que exista una sola evidencia en el expediente que respalde dicha afirmación. Estos elementos resultan relevantes, ya que ignoran factores fundamentales de autoprotección y responsabilidad que pueden influir en el análisis de los hechos y, en consecuencia, en la determinación de la responsabilidad en este caso.

**FRENTE AL HECHO 12:** No es cierto, pues bajo ninguna medida puede entenderse demostrada la relación de causalidad dentro del presente proceso, pues tal como ha sido altamente reiterado, recae sobre la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D) la responsabilidad del accidente. Así, todo lo concerniente al evento de tránsito ocurrido el 22 de septiembre de 2022 ocurrió por el hecho exclusivo de la víctima, es decir, en vista de las maniobras imprudentes de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.). Lo anterior, según lo establecido tanto en el IPAT como el Informe de Reconstrucción de Accidente de Tránsito (RAT) emitido por la entidad de control vial CESVI COLOMBIA, en el que se deja de manera explícita que el accidente tuvo lugar debido a la culpa de la víctima, pues su conducta fue completamente negligente a la hora de cruzar la vía.

Adicionalmente, es importante señalar que la prueba técnica presentada por la parte demandante contiene múltiples errores y omisiones que afectan su validez. En primer lugar, dicha prueba no analiza la conducta de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, quien, en horas de la noche, intentó cruzar una autopista de alto flujo vehicular, exponiéndose de manera imprudente al riesgo de accidente. Además, el informe parece asumir una supuesta distracción por parte de la conductora del vehículo HMM-905, sin que exista una sola evidencia en el expediente que respalde dicha afirmación. Estos elementos resultan relevantes, ya que ignoran factores fundamentales de autoprotección y responsabilidad que pueden influir en el análisis de los hechos y, en consecuencia, en la determinación de la responsabilidad en este caso.

**FRENTE AL HECHO 13:** No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por HDI SEGUROS S.A., Compañía Aseguradora sin relación alguna con los hechos expuestos. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

## FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

**ME OPONGO** a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda, por cuanto las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, como quiera que al hacer la narración de los hechos se pretende imputar una supuesta responsabilidad civil extracontractual, la cual como se establecerá dentro del proceso, no se estructuró, por cuanto no se vislumbran los elementos *sine qua non* para declararla, esto es la supuesta culpa, del daño y el nexo de causalidad entre uno y el otro.

Aunado a lo anterior, no es posible predicar responsabilidad alguna al extremo pasivo, toda vez que: Primero, es clara la configuración de la causal eximente de responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima”, toda vez que recae en cabeza de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.) el accidente ocurrido el 22 de septiembre de 2022. Segundo, no existe un nexo de causalidad entre la conducta desplegada por la señora Paola Andrea Córdoba Hinestroza, el fallecimiento de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.), pues en este caso se encuentra desvirtuada la existencia de dicho nexo causal. Tercero, en este proceso se incumplieron las cargas imperativas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio.

## OPOSICIÓN FRENTE A TODAS LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS Y DE CONDENA

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 1:** ME OPONGO a que se declare civil y solidariamente responsables a las señoras Paola Andrea Córdoba Hinestroza, Nancy Janeth Hinestroza Gaspar y a HDI Seguros S.A., toda vez que: **(i)** HDI Seguros S.A. está vinculada al presente proceso en atención a la póliza de seguro suscrita con el demandante, en ese sentido, su responsabilidad no puede ser solidaria y debe estar supeditada a cláusulas pactadas en el contrato de seguro. **(ii)** En el plenario no obran pruebas que acrediten que el hecho dañoso fue ejecutado por la demandada en mención (y, por consiguiente, no se ha demostrado la ocurrencia del riesgo asegurado en la póliza expedida por mi mandante). **(iii)** No se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta de la señora Paola Andrea Córdoba Hinestroza y el daño deprecado por los accionantes. **(iv)** Por el contrario, las documentales adosadas, el IPAT, y las que se harán llegar al plenario, el dictamen pericial de RAT, acreditan la existencia del hecho exclusivo de la víctima en la producción del evento reprochado por el extremo accionante.

Adicionalmente, en este caso se encuentra patente el incumplimiento de las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, dado que (i) La parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Al contrario, se observa que lo que operó en el presente caso fue el eximente de responsabilidad relativo al hecho exclusivo de la víctima. (ii) La tasación de perjuicios morales no se encuentra debidamente soportada. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, es claro que no ha nacido la obligación condicional del Asegurador.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 2:** ME OPONGO a la presente pretensión debido a que es consecuencial a la anterior pretensión y comoquiera que esta no tiene vocación de prosperidad por resultar improcedente, esta también debe ser desestimada. Sin perjuicio de lo anterior, me opongo concretamente así:

* **Oposición frente a los DAÑOS MORALES**

Aun cuando la parte actora no especifica el tipo de perjuicio solicitado, de una lectura integral de la demanda la parte admite en diferentes momentos que solicita el pago de perjuicios morales. Este reconocimiento resulta improcedente, ya que, además de no estructurarse la responsabilidad civil de la parte demandada, la pretensión es desproporcionada y contraviene los parámetros establecidos por la jurisprudencia en esta materia.

Descendiendo al caso en concreto, vemos como el accionante solicita la suma 500 SMLMV, no obstante, tal pretensión resulta completamente impróspera pues no se acredita ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dicho rubro. Adicionalmente, se desconoce que para tal reconocimiento es requisito *sine qua non* que se haya acreditado fehacientemente todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, situación que como ya se ha mencionado previamente, no se encuentra demostrada de forma alguna.

Se recalca que en casos de muerte la Corte Suprema de Justica en Sentencia SC5685-2018 del 19/12/2018 ha reconocido como tope máximo la suma de $36.000.000 M/Cte., cuando ha ocurrido una muerte de un hermano. Por lo que se hace necesario, que el señor juez en el presente caso, pese a que tiene arbitrio judicial para impartir órdenes, tenga en cuenta los lineamientos jurídicos que ya se han establecido dentro de nuestro ordenamiento jurídico, desestimando la suma tan exagerada que pretende la parte actora por este concepto, tanto para la víctima directa como para sus familiares, teniendo en cuenta el tope máximo reconocido en los casos graves en los que ha ocurrido una muerte.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 3:** ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión y, por el contrario, solicito de manera respetuosa al Despacho que condene en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

## EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

### EXCEPCIONES FRENTE A LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A LA PASIVA Y LOS PERJUICIOS ALEGADOS

1. **EXIMENTE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS POR CONFIGURARSE LA CAUSAL “HECHO EXCLUSIVO DE LA VICTIMA”.**

En el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna a los Demandados por los hechos acaecidos el 22 de septiembre de 2022, en el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo de placas HMM-905. Lo anterior, comoquiera que operó la causal eximente de la responsabilidad relativa al hecho exclusivo de la víctima. Bajo esta premisa, a través de esta excepción se le mostrará al Despacho cómo la ocurrencia del accidente de tránsito es atribuible exclusivamente a la irresponsabilidad, imprudencia, negligencia y falta de acatamiento de las normas de tránsito por parte de la víctima directa. Ello por cuanto de acuerdo con el informe Policial de Accidente de Tránsito, consagra como hipótesis del accidente la 409 “*Cruzar sin observar - No mirar a lado y lado de la vía para atravesarla*” atribuible a la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.), quien se desplazaba como peatón en horas de la noche. En ese orden de ideas, la configuración y aplicación de esta causal exonerativa de responsabilidad tiene por efecto la imposibilidad de imputación del daño al extremo pasivo de la litis.

Recordemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, la responsabilidad civil por actividades peligrosas admite la intervención exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad, toda vez que, no se puede desconocer que la conducta bien sea positiva o negativa de la víctima pudo tener una incidencia relevante en el examen de responsabilidad civil, ya que su comportamiento podría corresponder a una condición o incluso a la producción misma del daño.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha indicado con claridad que cuando la conducta imprudente de la víctima, fue suficiente para causar el daño, debe liberarse de toda responsabilidad a los demandados, así:

*“(…) La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.[[1]](#footnote-1)*

*(…)* *Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él ya haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella.*

*(…) En todo caso, así se utilice la expresión “culpa de la víctima” para designar el fenómeno en cuestión, en el análisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto técnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputación es de carácter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la infracción de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relación de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio interés. Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que* ***la “culpa de la víctima” corresponda – más precisamente – a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no solo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño****, con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del código Civil, aún cuando allí se aluda a “imprudencia” de la víctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son “capaces de cometer delito o culpa” o a comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre un daño)*

*Así lo consideró está Corporación hace varios lustros cuando precisó que “en la estimación que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para que tener en cuenta, a juicio de la Corte, el  fenómeno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la víctima,* ***porque no se trata entonces del hecho-fuente de la responsabilidad extracontractual que exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extraño a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a producir una consecuencia jurídica patrimonial en relación con otra persona*** *(…)”[[2]](#footnote-2) (*Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Por todo lo anterior, la doctrina y jurisprudencia contemporánea[[3]](#footnote-3) prefieren denominar el fenómeno en cuestión como el “hecho” de la víctima, como causa única en la producción del daño cuya reparación se demanda. Continuando con el estudio jurisprudencial del hecho de la víctima como causal eximente de la responsabilidad, debemos hacer referencia a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que en fallo del 17 de noviembre de 2020 se refirió a los elementos que estructuran la responsabilidad así:

*“(…) El régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito,* ***la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor*** *(…)”[[4]](#footnote-4) (Subrayado y negrilla fuera del texto)*

En el mismo pronunciamiento del 17 de noviembre de 2020, la corte indicó lo siguiente:

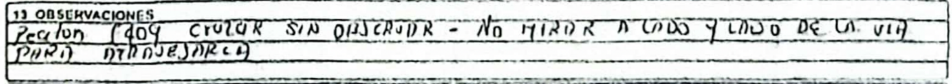
*“(…) La visión del asunto contenida en dicha providencia se traduce en una verdad inobjetable: si no existe nexo causal entre el daño y el actuar del demandado, resulta indudable que en ese evento no pudo mediar culpa o dolo de su parte, dado que, finalmente,* ***a nadie puede atribuirse falta alguna por un hecho que no tiene ninguna relación con su conducta*** *(…)”[[5]](#footnote-5) (Subrayado y negrilla fuera del texto)*

Teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, es dable concluir que de mediar un “hecho exclusivo de la víctima”, el presunto responsable y generador del daño será exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. Para el caso que nos ocupa, es totalmente claro que la conducta de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.), fue el único factor relevante y adecuado que incidió en las lesiones por ella sufridas que a la postre se materializaron en su deceso. Por tal razón, resulta jurídicamente inviable imputarle responsabilidad a los demandados. Por tanto, deberá el honorable juez proceder a negar las pretensiones de la demanda.

Es necesario analizar los medios de prueba aportados para determinar la incidencia exclusiva del actuar de la señora Naranjo Domínguez, en la acusación del accidente de tránsito. Así: **(i)** El IPAT atribuye exclusivamente las causas del accidente a la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez; **(ii)** El Dictamen Pericial de Reconstrucción de Accidente de Tránsito No. 5826 emitido por CESVI COLOMBIA, que se aporta con esta contestación, se concluye que la causa fundamental del accidente radica que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias al momento de realizar el cruce por parte de la peatona; y, **(iii)** La prueba técnica presentada por la parte demandante No. 06-2024, por su parte, contiene una serie de errores técnicos que evidencian que en esta no se realizó un análisis objetivo ni exhaustivo del caso. Por el contrario, parece estar predispuesta a sustentar una versión favorable a la demandante, omitiendo hechos relevantes, como el intento de cruce de una autopista que no permite el cruce peatonal a altas horas de la noche, lo cual representa una conducta de altísimo riesgo por parte de la señora Naranjo Domínguez. Además, este documento se base en su totalidad en una supuesta distracción de la conductora del vehículo HMM-905, argumento que no tiene sustento alguno en las pruebas documentales y testimoniales del expediente, y sin evidenciarse elementos que puedan confirmar esta hipótesis.

* **El Informe Policial de Accidente de Tránsito atribuye de manera exclusiva a la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.) las causas del accidente**.

Así las cosas, el Despacho debe advertir que el Informe Policial de Accidente de Tránsito, le atribuye las causas del accidente exclusivamente al peatón, señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, con la codificación No. 409 correspondiente a “*Cruzar sin observar - No mirar a lado y lado de la vía para atravesarla*”, atribuible cuando el peatón no se detiene a observar la vía antes de atravesarla.



*INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO*

*HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO: “Peatón (409 Cruzar sin observar – No mirar a lado y lado de la vía para atravesarla)”*

Lo anterior, demuestra contundentemente que desde la prueba base de este proceso (Informe Policial de Accidente de Tránsito) queda totalmente claro que las causas que ocasionaron el accidente en el que resultó lesionada la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, en ningún caso pueden ser imputables a la conductora del vehículo de placas HMM-905, ni mucho menos a la propietaria de dicho vehículo. Por cuanto es evidente que las circunstancias que rodearon el hecho se encontraban en la esfera del dominio de la víctima y no de los demandados.

Es tan clara la ausencia de responsabilidad por parte de la conductora del vehículo HMM-905 y como consecuencia del propietario, que en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito no quedó consignada codificación alguna atribuible a la conductora de dicho vehículo. Dicho esto, es importante anotar que el hecho de la víctima hace parte de las causas extrañas mediante las cuales se rompe el vínculo de causalidad entre los perjuicios sufridos por demandante y la conducta del que es señalado de ser responsable. De modo tal, que la conducta de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.) reviste de la calidad y envergadura requerida para excusar la responsabilidad de la conductora del vehículo de placas HMM-905 y los demás demandados.

Por lo tanto, al determinarse la responsabilidad que obra en cabeza de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez operó la causal exonerativa de responsabilidad denominada “hecho de exclusivo de la víctima”, en tanto fue este quien expuso imprudentemente su vida al quien cruzó la vía en zona prohibida sin tomar las medidas de prevención requeridas, es decir que, de manera voluntaria, asumió un riesgo que a la postre se materializó en sus lesiones, pues fue quien decidió violar las normas de tránsito vigentes. Lo que desde ya debe indicarle al Despacho una falta total de prudencia de la víctima, dado que el accidente habría podido evitarse si de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez, hubiese atendido a las normas de tránsito que regulan el comportamiento de los conductores en la vía, puesto que el Código Nacional de Tránsito en su artículo 56 y 57 establecen claramente las obligaciones de los peatones, entre ellas la de cruzar únicamente por las zonas designadas y respetar las normas de tránsito, especialmente en vías de alto flujo vehicular. Así, se determina que:

*“****ARTÍCULO 57. CIRCULACIÓN PEATONAL.*** *El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos.* ***Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo****.” (Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

***“ARTÍCULO 58. PROHIBICIONES A LOS PEATONES:*** *Los peatones no podrán:*

*(…)*

***4. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física****.*

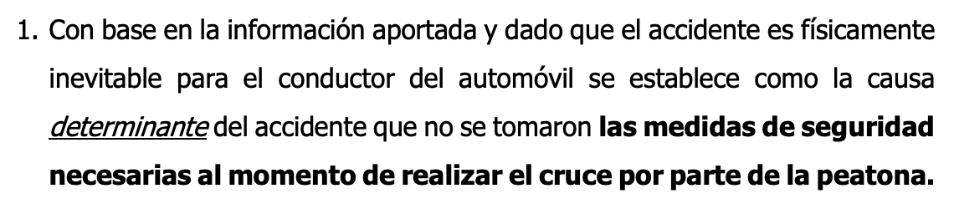
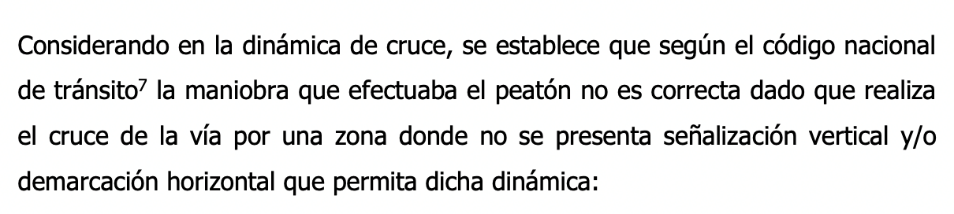
***5. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales.”***  *(Subrayado y negrilla por fuera de texto)*

Bajo dicho derrotero, es evidente que la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez realizó una conducta prohibida, exponiendo su vida imprudentemente y desatendiendo las leyes que regulan el tránsito en Colombia. Lo que no puede ser desconocido por el Despacho, puesto que desde la prueba base de este proceso (Informe Policial de Accidente de Tránsito) queda totalmente claro que la causa que ocasionó el accidente en el que lamentable falleció la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez fue de su exclusiva responsabilidad y no de la conductor del vehículo de placas HMM-905. Por cuanto es evidente que las circunstancias que rodearon el hecho se encontraban en la esfera de dominio de la víctima y no de los demandados.

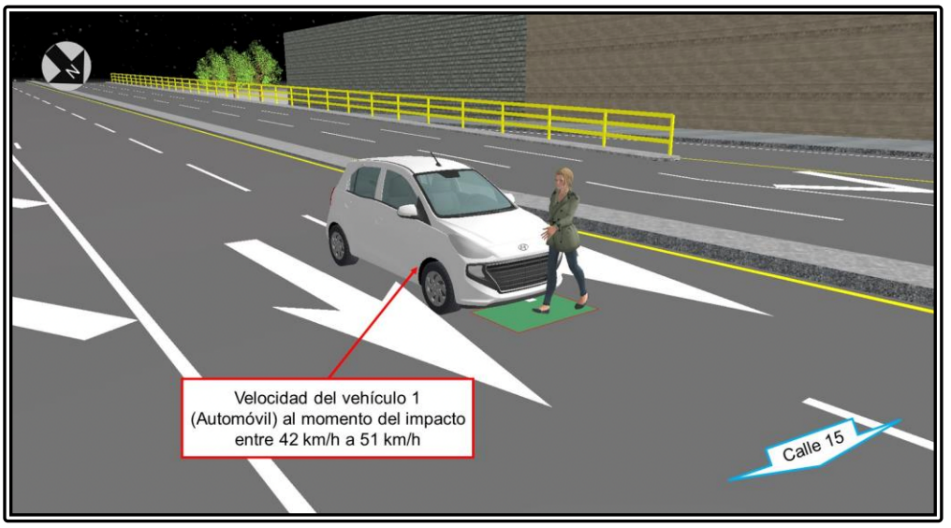
Así, a partir del informe de accidente de tránsito se acredita totalmente que la única causa del daño es atribuida a la peatona, la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.). Lo que significa, que efectivamente nos encontramos ante la configuración de la causal eximente de responsabilidad “hecho exclusivo de la víctima” que libera de toda responsabilidad a la parte pasiva de esta litis.

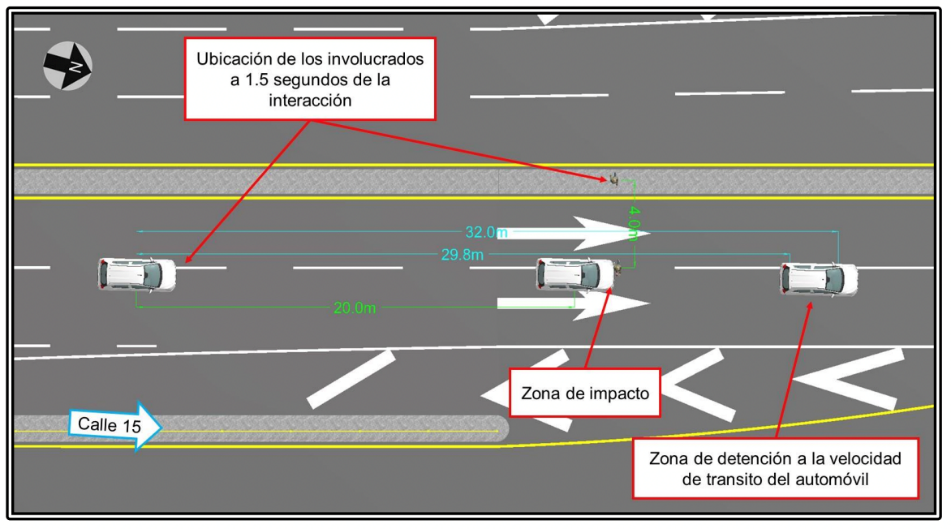
1. ***El Dictamen Pericial de Reconstrucción de Accidente de Tránsito No. 5826 emitido por CESVI COLOMBIA.***

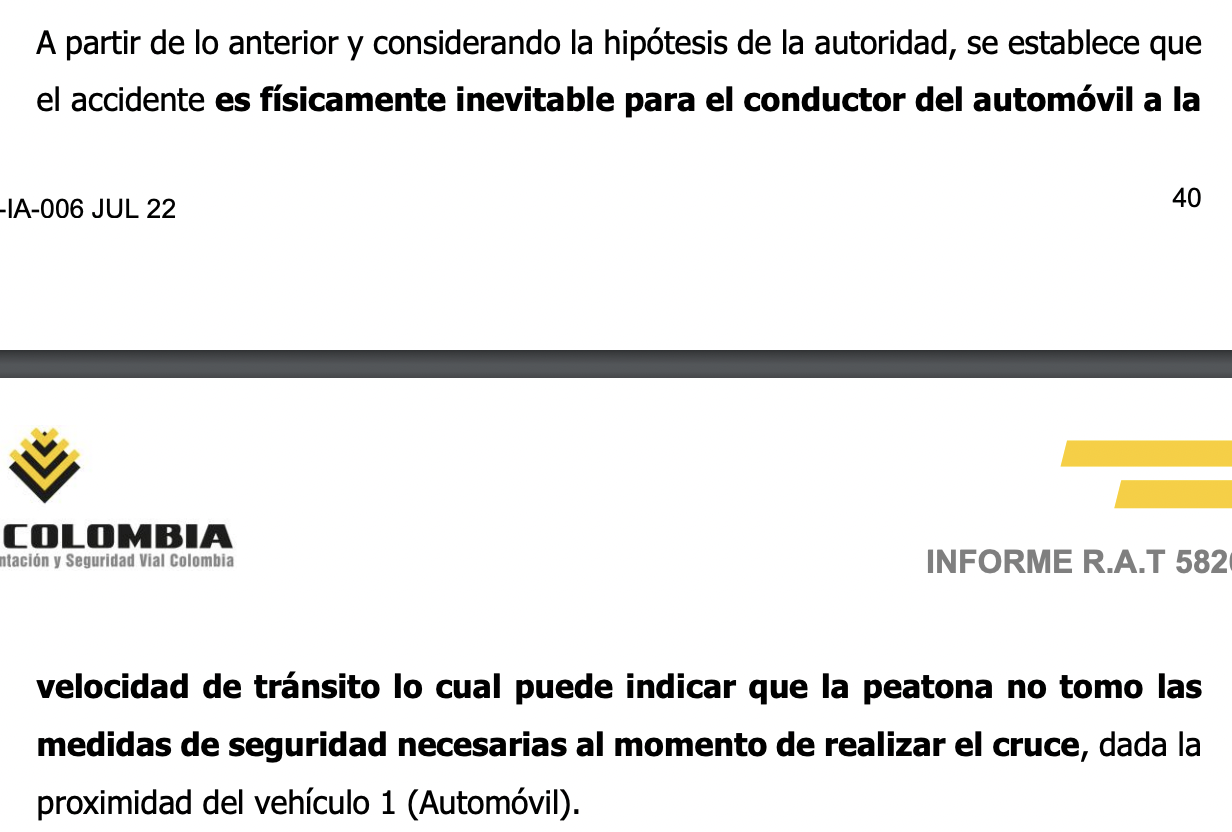
Además de todo lo expuesto anteriormente, debe constar que en el Dictamen Pericial de Reconstrucción de Accidente de Tránsito No. 5826 emitido por CESVI COLOMBIA, se determina que el accidente se generó en razón a que la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.) no tomo las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su salud:



Así, debe quedar claro para este honorable Despacho que el accidente acaecido el 22 de septiembre de 2022 fue consecuencia del actuar imprudente de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.). El material probatorio compilado en el proceso demuestra que, al intentar cruzar la vía, la señora Naranjo impactó con el vehículo asegurado, en circunstancias que resultaban inevitables para la conductora del vehículo HMM-905. Esta última se desplazaba a una velocidad permitida, entre 43 y 51 km/h, lo cual le dejaba solo 1.5 segundos de tiempo de reacción para evitar la colisión, lo que hacía imposible eludir el accidente en esas condiciones.







1. ***Informe “pericial” elaborado por la sociedad Grupo Especializado en Seguridad Vial - GESVAL***

Es importante que este despacho considere que el denominado "informe pericial" fue presentado en el proceso únicamente como una prueba documental y no como un dictamen pericial en sentido estricto, por lo que sus conclusiones deben valorarse como un informe técnico.

Ahora bien, en cuanto a su contenido, cabe resaltar que el análisis de dicho informe revela una serie de errores técnicos que cuestionan su objetividad y exhaustividad. El documento parece predispuesto a favorecer la versión de la demandante, omitiendo factores determinantes como:

1. **La conducta de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez**: No se analiza adecuadamente que intentó cruzar una autopista de alto flujo vehicular en horas de la noche, exponiéndose al riesgo de accidente de manera imprudente.
2. **Ausencia de paso peatonal**: No se menciona que la vía por la que intentó cruzar la señora Naranjo Domínguez carece de paso peatonal, lo cual demuestra la imprudencia de su acto.
3. **Suposición de distracción**: El informe asume una posible distracción por parte de la conductora del vehículo HMM-905, Paola Andrea Córdoba Hinestroza, sin que exista evidencia en el expediente que respalde esta afirmación.

Además, en la página 37 de dicho documento, se indica explícitamente que el riesgo era imprevisible para la señora Paola Córdoba Hinestroza, ya que no contaba con medios para percibir el peligro inminente de la conducta que desplegaba en ese momento la señora Naranjo Domínguez. Esta afirmación refuerza la postura de que la responsabilidad del accidente no puede recaer sobre mi representada, ya que la situación generada por la peatona fue súbita e inevitable desde la perspectiva de la conductora.

En conclusión, tras el análisis fáctico y normativo del caso, encontramos sin lugar a dudas que el comportamiento de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.) fue totalmente negligente, imprudente, irresponsable y contrario a las normas de tránsito. En ese sentido, es completamente evidente ante la lógica fáctica de los sucesos ocurridos, que los causantes del accidente de tránsito fueron justamente las víctimas por su actuar imprudente, irresponsable y negligente. En ese sentido, es completamente evidente ante la lógica fáctica de los sucesos ocurridos, que los causantes del accidente de tránsito fueron justamente las víctimas por su actuar imprudente, irresponsable y negligente. En consecuencia, se deberán negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Por lo anterior, solicito señor Juez se tenga como probada esta excepción.

### INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LOS DEMANDADOS POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL.

El extremo actor formula la presente demanda con fundamento en que la causa adecuada del daño fue la conducta de la señora Paola Andrea Córdoba Hinestroza, quien alega de manera discursiva la parte demandante actuó con *“imprudencia y falta de cuidado”*. Sin embargo, debe advertirse desde ahora que no es cierto, puesto que tal tesis queda totalmente desvirtuada con el Informe Policial de Accidente de Tránsito, donde se estableció que la hipótesis del accidente le era atribuible a la irresponsabilidad y negligencia de la víctima por falta de prudencia en la actividad de conducción.

La teoría de la causalidad aplicada en Colombia es la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones en la que simplemente basta aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere o no presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones *sine qua non*, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado. Doctrina autorizada y reciente confluye en aseverar que para declarar la responsabilidad es necesaria la concurrencia de tres elementos indispensables, a saber:

*“Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado.* ***La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto****. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.”[[6]](#footnote-6)* – (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En ese sentido, debe precisarse que una actividad peligrosa es la que puede producir daños incontrolables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea. De ahí, que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias, pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible. Ahora bien, la labor persuasiva debe orientarse a establecer cuál de todos los comportamientos antijurídicos ocasionó el daño. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“(…) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo”[[7]](#footnote-7)*

En efecto, el concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia. Del mismo modo, en este punto es menester aclarar que la responsabilidad civil supone resarcir un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino que opera entre quienes ha vinculado únicamente el azar. En particular, la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de vehículos automotores, supone (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos, (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario, demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal, y (iii) que en los casos de actividades peligrosas concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada actor.

De manera que en la investigación dirigida a establecer si fue destruido el nexo causal o a ponderar el grado de incidencia de la conducta de la víctima, entre los varios antecedentes que en forma hipotética ocasionaron el daño, únicamente deben dejarse los que, atendiendo los criterios dichos en la jurisprudencia, tuvieron la aptitud para producirlo, mas no los que simplemente emergieron como factores meramente circunstanciales. En el caso concreto, es menester señalar que la parte demandante en el presente asunto no acreditó los elementos para la configuración de la responsabilidad civil. En tal sentido, de conformidad con el artículo 2341 del Código Civil que dispone que quién ha inferido daño a otros está obligado a la indemnización, en relación con tal precepto, cuando un sujeto de derecho, a través de sus acciones u omisiones causa injustamente un daño a otro y existe además un factor o criterio de atribución subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que permita trasladar dicho resultado dañoso a quien lo ha generado. Surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la persona que ha sufrido el detrimento y que en todo caso tiene como fin la reparación del daño inferido.

Dicho lo anterior, resulta evidente que en el presente caso no se encuentra acreditado un nexo causal entre la conducta de los demandados y la consecuencia final, toda vez que como se explicó, en este proceso operó la causal eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de la víctima, dado que como se ha manifestado, la causa del accidente obedeció a la conducta imprudente de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.). En cualquier caso, dicho nexo causal que pretende hacer valer la parte demandante en este proceso no se encuentra acreditado mediante ninguna prueba documental y/o elemento de juicio que permita demostrar un verdadero nexo. Por el contrario, lo que se reflejó del análisis de las pruebas documentales, fue justamente que en este caso operaron la causal eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de la víctima. Razón por la cual, al no encontrarse acreditado un nexo causal, no podría endilgársele al extremo pasivo ningún tipo de responsabilidad por no encontrarse uno de los elementos estructurales de la responsabilidad.

En conclusión, no hay prueba de la existencia del nexo causal entre el supuesto hecho generador del daño y el daño alegado. Pues como se ha analizado, en este caso se configuró la causal eximente de responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima”, por cuanto la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.) de manera voluntaria, asumió un riesgo que a la postre se materializó en sus lamentable deceso. Lo anterior desvirtúa cualquier nexo causal que pretenda endilgar la parte actora. Por lo tanto, al no encontrarse acreditado el nexo causal, no podría endilgársele al extremo pasivo ningún tipo de responsabilidad por no encontrarse demostrado uno de los elementos estructurales de la misma.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE LA INTERVENCIÓN CAUSAL DE LA VÍCTIMA EN EL ACCIDENTE.**

En gracia de discusión y de manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se reconocieran una o algunas de las pretensiones esgrimidas por los demandantes, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización, en proporción a la contribución que tuvo en el accidente la víctima, pues fue la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D) quien cruzó la vía en una zona donde no existen pasos peatonales y sin tomar las medidas de precaución requeridas para ello. Por supuesto, sin perjuicio de que como ya se demostró en las anteriores excepciones, existen pruebas y elementos de juicio suficientes tales como el Informe Policial de Accidente de Tránsito y el Dictamen Pericial de Reconstrucción Forense de Accidente de Tránsito - RAT, para determinar que la responsabilidad del siniestro se encuentra en cabeza de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D).

Para efectos de lo anterior, es importante traer a este escrito lo preceptuados en el Código Civil respecto a la reducción de la indemnización:

*“****ARTÍCULO 2537. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN****. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.”*

Por otra parte, la Corte Suprema de justicia ha indicado que cuando un tercero ha sido participe del hecho, la indemnización debe reducirse:

*“Cuando el hecho lesivo es generado por la acción independiente de varias personas, sin que exista convenio previo ni cooperación entre sí, pero de tal suerte que aún de haber actuado aisladamente, el resultado se habría producido lo mismo, entonces surge la hipótesis de la causalidad acumulativa o concurrente, prevista en el artículo 2537 del ordenamiento civil, según el cual la apreciación del daño está sujeta a reducción (…)”[[8]](#footnote-8)*

Conforme a lo dicho, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia de la víctima en la ocurrencia del daño. Lo anterior, a efectos de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución al daño sufrido, como consecuencia de sus propias conductas imprudentes. Comoquiera que la responsabilidad de los demandados resultó menguada por la participación determinante de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D) en la ocurrencia del suceso. De tal suerte que queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima quien transitaba en calidad de peatona, en la ocurrencia del daño por el cual los demandantes solicitan indemnización. Así es como lo ha indicado la jurisprudencia en reiteradas ocasiones:

*“De ahí que, la autoridad judicial demandada se encontraba habilitada para estudiar si se configuraba alguno de los eximentes de responsabilidad, entre los que se encuentra, el hecho de la víctima, como efectivamente lo hizo.* ***Por ello, al encontrar que la actuación de la víctima directa concurrió en la producción del daño, decidió reducir el valor de la indemnización.*** *De modo que, contrario a lo alegado por el actor, el juez de segunda instancia no desbordó el marco de su competencia y tampoco incurrió en el defecto sustantivo alegado.”[[9]](#footnote-9)* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

En distinto pronunciamiento, la misma Corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del cincuenta por ciento (50%) de los perjuicios:

*“Todo ello, en pos de la responsabilidad que por el riesgo creado debe afrontar la entidad demandada ─Fiscalía General de la Nación─* ***implica que, en merecimiento de la culpa evidenciada de la víctima, se debe efectuar una reducción en la condena, la cual se estima, por el nivel de incidencia de la negligencia de los demandantes*** *─propietarios de edificio donde funcionaba el centro comercial─, equivalente al 50% de los perjuicios que lleguen a probarse y concederse en favor de estas personas, ya que del mismo tenor del riesgo que reclaman, fue la imprudencia de los demandantes en la no evitación del daño.”[[10]](#footnote-10)* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Como se lee, el fallador encontró probada la incidencia de la víctima en la causa generadora del daño en proporción a un cincuenta por ciento (50%) y en ese sentido redujo los perjuicios que se probaron en el proceso en el mismo porcentaje.

En conclusión, al encontrarse acreditado por medio de las pruebas que obran en el expediente que la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D), tuvo incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito acaecido el día 22 de septiembre de 2022, pues justamente su fallecimiento se debió a que la víctima expuso injustificadamente su vida al cruzar por una zona con alto flujo vehicular y donde no existe paso peatonal sin tomar las medidas de precaución debidas, deberá el Despacho declarar su porcentaje de participación en la causación del daño y como consecuencia reducir la indemnización que en un remoto e hipotético evento llegara a ordenarse.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

#### TASACIÓN EXORBITANTE DE LOS DAÑOS MORALES PRETENDIDOS POR LOS DEMANDANTES.

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a su favor, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Aunado a ello, sin que lo aquí expuesto constituya aceptación alguna de responsabilidad, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien es cierto que no existen criterios objetivos de aplicación mecánica respecto a la cuantificación de los daños morales, cabe resaltar que los tipos de perjuicios extrapatrimoniales que solicita la parte actora sean reparados económicamente, resultan o tratan de una compleja tipología de perjuicios cuya configuración depende de la existencia de una serie de elementos subjetivos. Lo anterior, además de que su tasación si bien se encuentra deferida “*al arbitrium judicis*”, es decir, al recto criterio del fallador, de todas maneras, deben ser debidamente acreditados, demostrados y tasados por quien los pretende. Teniendo en cuenta adicionalmente, que este tipo de perjuicios *“se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables”.[[11]](#footnote-11)*

Ha señalado igualmente la Corte[[12]](#footnote-12) que, dentro de la concepción jurídica de los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente respecto al daño moral, por ejemplo, no hay una valoración pecuniaria en sentido estricto, ya que al pertenecer a la psiquis de cada persona *“es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital”*. De ahí entonces que sea razonable estimar que, (i) en cada caso el Juez realice una valoración concreta, con la debida objetividad y conforme lo que se logre probar en el transcurso del proceso; y, (ii) no resulta apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento*, “ya que eso iría en contravía de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario”*.

La tasación del daño moral efectuada por el extremo actor en las pretensiones de la demanda de 500 SMLMV es a todas luces exorbitante y carece de cualquier sustento normativo y/o jurisprudencial. En ese sentido, es claro que la parte demandante está efectuando una petición que excede con creces los baremos máximos establecido por la jurisprudencia[[13]](#footnote-13), razón por la cual, la suma solicitada no puede ser reconocida, incluso, en el remoto evento en que se llegase a demostrar la presunta responsabilidad endilgada al extremo pasivo.

Siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 23/05/2018, MP: Aroldo Wilson Quiroz, Rad: 11001-31-03-028-2003-00833-0, en donde se estableció que se reconocerá una suma por concepto de daño moral una suma máxima de $60.000.000 cuando nos encontramos ante daños permanentes, y sean familiares consanguíneos de primer grado.

*“En todo caso, conviene tener a la vista que esta Corporación, para eventos de daños permanentes con comprobada trascendencia en la vida de los afectados, ha accedido a reparaciones morales de $50.000.000 (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.° 2000-00196-01) y $60.000.000 (SC9193, 28 jun. 2017, rad. n.° 2011-00108-01), equivalentes a 72,5 y 81,3 salarios mínimos vigentes para la fecha de las condenas, respectivamente, razón por la que 20 smlmv no se advierte como una indemnización desatinada en un caso con consecuencias temporales”*

Asimismo, en Sentencia SC5685-2018 del 19/12/2018, se taso por muertes de hermanos, abuelos y nietos la suma de $36.000.000 a causa de una explosión e incendio de miles de barriles de petróleo derramado sobre el rio Pocuné, luego de la voladura de un tramo por parte de grupo subversivo.

Según las jurisprudencias citadas, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en las sumas pretendidas por la parte demandante. Pues en primer lugar, solicitar la suma de 500 SMLMV para todos los demandantes resulta exorbitante, puesto que el tope fijado por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia corresponde a $60.000.000 en los casos más graves, como en casos de muerte para familiares consanguíneos de primer grado, y en un máximo de $36.000.000 en casos de abuelos, nietos o hermanos. En virtud de lo anterior, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

En conclusión, es inviable el reconocimiento del daño moral pretendido por la parte actora, pues la tasación propuesta es equivocada y en algunos casos, no tiene ningún tipo de fundamento para su solicitud. En tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto de daño moral que supere los montos fijados a partir de la Sentencia de la SC5685-2018 del 19 de diciembre de 2018, se estableció que los casos más graves como es la muerte únicamente se le podrá reconocer a cada uno de los hermanos la suma máxima de $36.000.000. En consecuencia, la suma solicitada resulta exorbitante y se encuentra por fuera de los lineamientos establecidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### EXCEPCIONES FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO

#### INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE HDI SEGUROS S.A. POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

En este punto es necesario advertir la Póliza de Seguro de Automóviles No. 4227743 no podrá afectarse, toda vez que el accidente de tránsito del 22 de septiembre de 2022, acaeció por un hecho exclusivo de la víctima, por lo cual se configuró una causal eximente de responsabilidad. A saber, el IPAT, estableció para que el accidente se ocasionó en razón del actuar de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.), lo cual fue confirmado mediante la experticia realizada por CESVI COLOMBIA y que aquí se aporta. De manera que, ante el rompimiento del nexo causal necesario para la declaratoria de responsabilidad del asegurado, se concluye por contera, que no se acreditó la ocurrencia del riesgo asegurado. Por otro lado, los demandantes no acreditaron la cuantía de la pérdida por cuanto las peticiones que realizan en torno a los perjuicios inmateriales no están debidamente sustentadas. Ergo, no se probó la ocurrencia del siniestro ni su cuantía, en los términos previstos en el Art. 1077 del Código de Comercio.

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante, quien en la relación contractual tiene la calidad de beneficiaria. En ese sentido el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

*“****ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA****. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.*

*El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.”* - (Subrayado por fuera de texto)

Lo anterior le impone al accionante la carga de demostrar el supuesto de hecho de la norma que invoca a su favor, es decir, probar tanto la realización del riesgo asegurado como la cuantía de la pérdida. El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

*“(…) Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible”*

*“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro,* ***el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su perdida****. (…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

*“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080) (…)”[[14]](#footnote-14) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:

*“(…) 2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.*

*2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).*

*2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).*

*2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art. 1089, ib.) (…)[[15]](#footnote-15)”.*

La Corte Suprema de Justicia, ha establecido la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

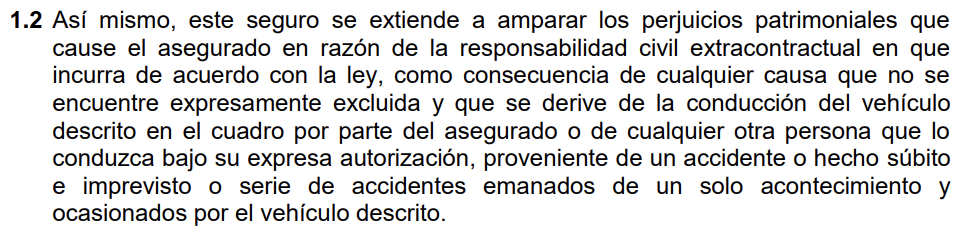
*“(…)* ***Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida.*** *De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio. En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios (…)[[16]](#footnote-16)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1077 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

1. **La no realización del Riesgo Asegurado**

De conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza No. 4227743 y de las pruebas obrantes en el plenario, podemos concluir que el riesgo asegurado en este caso no se realizó. Mediante la póliza en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la Aseguradora cubre la Responsabilidad Civil Extracontractual atribuible al Asegurado nombrado en la carátula de la póliza cuando este deba asumir un daño y/o gastos legales derivados de una reclamación basada en una responsabilidad de carácter extracontractual. Sin embargo, en este caso encontramos que en el plenario no se encuentran acreditados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la Responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, el extremo actor no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de las demandadas y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró. El riesgo fue descrito dentro de las condiciones del contrato de seguro, de la siguiente manera:



Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que: **(i)** No se prueba que el hecho generador del daño esté en cabeza de la señora Paola Andrea Córdoba Hinestroza, conductora del vehículo asegurado; **(ii)** no existe nexo causal entre la conducción del vehículo de placas HMM-905 y los daños ocasionados a la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.); y **(iii)** dentro del plenario obran varias pruebas que constan que el accidente se ocasionó en razón del actuar imprudente y omisivo de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.), configurándose entonces causal de exclusión denominada hecho exclusivo de la víctima. Así, tanto en el IPAT como el Informe de Reconstrucción de Accidente de Tránsito (RAT) emitido por la entidad de control vial CESVI COLOMBIA, en el que se deja de manera explícita que el accidente tuvo lugar debido a la culpa de la víctima, la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.), raíz de no observar la vía antes de cruzar. Como consecuencia de ello, no ha nacido la obligación condicional por parte de la aseguradora.

Adicionalmente, es importante señalar que la prueba técnica presentada por la parte demandante contiene múltiples errores y omisiones que afectan su validez. En primer lugar, dicha prueba no analiza la conducta de la señora Beatriz Eugenia Naranjo Domínguez (Q.E.P.D.), quien, en horas de la noche, intentó cruzar una autopista de alto flujo vehicular, exponiéndose de manera imprudente al riesgo de accidente. Además, el informe parece asumir una supuesta distracción por parte de la conductora del vehículo HMM-905, sin que exista una sola evidencia en el expediente que respalde dicha afirmación. Estos elementos resultan relevantes, ya que ignoran factores fundamentales de autoprotección y responsabilidad que pueden influir en el análisis de los hechos y, en consecuencia, en la determinación de la responsabilidad en este caso.

1. **Acreditación de la cuantía de la pérdida**

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios toda vez que no se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso. Lo anterior, puesto que los demandantes solicitan el reconocimiento del daño moral, sin embargo, no justifica las sumas solicitadas mediante ninguna prueba o elemento de juicio suficiente. En ese sentido, al no existir prueba si quiera sumaria que permita acreditar tales emolumentos los mismos no pueden ser reconocidos con cargo a la Póliza de Seguro. Concretamente pido al Despacho tener en cuenta que es inviable el reconocimiento del daño moral pretendido por la parte actora, pues la tasación propuesta es equivocada y no se establece en ningún caso fundamento para su solicitud

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida, que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por otro lado, respecto a la acreditación de la cuantía de la supuesta pérdida, no se encuentra probada, comoquiera que el daño moral solicitad es improcedentes, teniendo en cuenta que no existe prueba que acredite su causación con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 22 de septiembre de 2022. En ese entendido, debido al incumplimiento de las cargas que imperativamente establece el artículo 1077 del Código de Comercio, deberán negarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA No. 4227743.

Sin perjuicio de las excepciones precedentes, se plantea que dentro de las condiciones particulares de la Póliza No. 4227743 suscrita entre mi representada y la señora Nancy Janeth Hinestroza Gaspar, se establecieron los parámetros que enmarcan la obligación condicional y la delimitación de la extensión del riesgo asumido por HDI SEGUROS S.A. En efecto, en ella se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio aseguraticio.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que se excluyen de amparo, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“*En efecto, no en vano los artículos 1056[[17]](#footnote-17) y 1120 del Código de Comercio, permiten al asegurador, con las restricciones legales, escoger los riesgos que a su arbitrio tenga a bien en amparar y estipular las exclusiones expresas de riesgos inherentes a dicha actividad.*

*Por lo demás, debe la empresa de seguros tener presentes que, en la delimitación del riesgo, no debe vaciar de contenido ese que asume pues tal postura conllevaría a un remedo de amparo sin traslación efectiva de riesgos, sucesos que originan pérdidas y, en suma, desembolsos económicos”.[[18]](#footnote-18)*

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia definió la inexistencia de responsabilidad del asegurador cuando el riesgo se encuentra expresamente excluido, así:

*“Este principio de la universalidad que informa al seguro de transporte, entre otros más, justifica las precisas diferencias que, en lo pertinente, existen con las demás clases de seguros.* ***Así, por vía de ejemplo, en lo tocante con la delimitación del riesgo****, mientras el artículo 1056 del Código de Comercio permite que el asegurador, a su arbitrio, asuma “todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”, el art. 1120 ib. preceptúa que el seguro de transporte “comprende todos los riesgos inherentes al transporte, salvo el deterioro por el simple transcurso del tiempo y los riesgos expresamente excluidos” (Se subraya), luego,* ***en este último negocio aseguraticio, el asegurador es responsable cuando la pérdida sea ocasionada por uno de los “riesgos inherentes al transporte”, salvo que el riesgo se encuentre expresa e inequívocamente excluido por las partes****”[[19]](#footnote-19)* – (Subrayado y negrilla por fuera de texto.

Bajo esa misma interpretativa, la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 13 de diciembre de 2018, indicó que las exclusiones de tipo convencional estipuladas en los contratos de seguro no comprometen la responsabilidad del asegurador, en virtud de la facultad prevista en el artículo 1056 del Código de Comercio:

*“Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como aquellas pactadas por las partes o, cuando menos,* ***en las que existe consentimiento respecto de las indicadas en el clausulado prestablecido, en los denominados acuerdos de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia del mismo, no comprometen la responsabilidad del asegurador****.*

*Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la libre autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas costumbres; de ahí que el artículo 1056 consagre la posibilidad del asegurador de, «a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”[[20]](#footnote-20)* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

Así las cosas, según la jurisprudencia previamente expuesta, se evidencia como se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los Contratos de Seguro. Razón por la cual, es necesario señalar que en la Póliza 4227743, emitida por HDI SEGUROS S.A. en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones para todas las coberturas, porque de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza de HDI SEGUROS S.A., por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación del Contrato de Seguro, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones respecto a mi mandante.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

1. **INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE HDI SEGUROS S.A. Y LOS DEMÁS SUJETOS QUE INTEGRAN LA PARTE DEMANDADA.**

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia[[21]](#footnote-21) ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte[[22]](#footnote-22) igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…)* ***La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.*** *De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y* ***si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización****. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

#### CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO DEL CONTRATO DE SEGURO

Comoquiera que no se encuentra acreditada la causación de perjuicio alguno en detrimento o afectación de la activa de la acción, no es dable la imposición de obligación indemnizatoria en cabeza de mi procurada, pues la póliza de seguro respecto a la cual se vincula a HDI Seguros S.A., cuenta con un carácter meramente indemnizatorio. Lo que deviene en que la misma únicamente podrá afectarse dentro de los límites propios del resarcimiento de los perjuicios efectivamente acreditados.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al riesgo asumido ni a los perjuicios plenamente acreditados.

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

*“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”*

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

*“****Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento****. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

A su vez, el artículo 1127 ibidem, dispone lo siguiente:

*“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador* ***la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley*** *y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.*

*Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.”* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

Ahora bien, en atención a que, de conformidad con el acervo probatorio que milita en el expediente no se acreditó la causación de ninguno de los perjuicios pretendidos por la demandante y en atención a que el contrato de seguro tiene como fin último la reparación, indemnización y/o compensación por los daños y perjuicios devenidos a partir de la configuración de un riesgo asegurado. En ese entendido, las pretensiones condenatorias incoadas por el extremo actor no pueden ser reconocidas debido a que no se encuentran adecuadamente probadas.

En efecto, en relación al daño la falta de pruebas sustanciales para respaldar estos perjuicios fundamenta la inviabilidad de su reconocimiento. En el caso de marras no es viable el reconocimiento y pago de suma alguna, por cuanto no está demostrada la ocurrencia del riesgo amparado, responsabilidad civil extracontractual. Razón por la cual, de pagar suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro, y eventualmente enriqueciendo a los demandantes.

En conclusión, como no existe ninguna certeza de los perjuicios pretendidos y mucho menos de que los mismos hubieren sido causados por el asegurado, reconocerlos con cargo a la póliza transgrediría en mayor medida el carácter indemnizatorio del contrato de seguro, por lo tanto, deberá el Despacho evitar exactamente la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y así evitar un enriquecimiento sin justa causa en beneficio de la parte actora.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

#### EN TODO CASO, NO SE PODRÁ SUPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA No. 4227743

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que en este sentido sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de HDI SEGUROS S.A. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

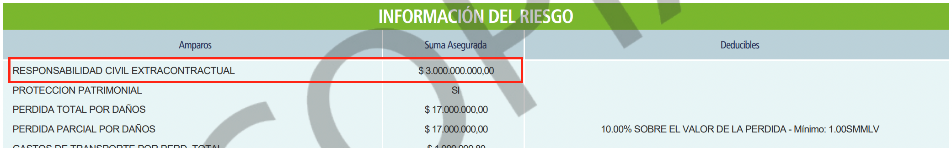
En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

***“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA****. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.*

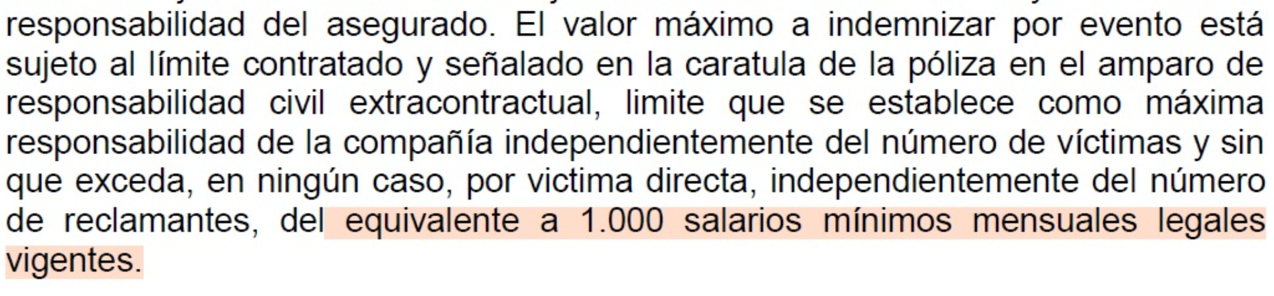
La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación,* ***el valor de la prestación a cargo de la aseguradora****, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños,* ***se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado****, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”*[[23]](#footnote-23)- (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

Por consiguiente, en caso de ser condenados, existe un tope de la suma fijada en la carátula de la póliza de conformidad con lo concertado, dependiendo de la cobertura y lo anterior para la indemnización de todos los perjuicios. Así pues, en relación al contrato de seguro instrumentado a partir de la póliza de seguro, es importante señalar que para predicar algún tipo de obligación en virtud de la misma se deberán tener en cuenta los límites máximos de responsabilidad plasmados en ella, los cuales se aprecian en la siguiente imagen tomada de la carátula de la póliza:



Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso en concreto, en virtud de los artículos 1079 y 1089 del Código de Comercio, se tiene que la cobertura tiene un sublímite de 1000 SMLMV por víctima directa, es decir este es el límite máximo de responsabilidad de la compañía por evento , Véase:



Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado y que el contrato de seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

Solicito declarar probada esta excepción.

#### DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

#### GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o al contrato de seguro utilizado para convocar a mi representada al presente litigio mediante acción directa, incluyendo la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro (artículo 1081 del Código de Comercio).

Solicito declarar probada esta excepción

## PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRUEBAS DEL EXTREMO ACTOR

#### INFORME PERICIAL

Antes de abordar el análisis del contenido del informe presentado por la parte demandante, es fundamental resaltar que dicho documento fue aportado como prueba documental y no como un dictamen pericial formal dentro del proceso. Esto implica que no debe valorarse con el mismo peso probatorio que tendría un dictamen pericial. En este orden de ideas, al carecer de la formalidad y rigor propios de una pericia, sus conclusiones deben ser tomadas como meras observaciones técnicas, y no como hallazgos concluyentes que puedan determinar la responsabilidad de mi representada en el accidente.

Por lo demás, debe señalarse que con la demanda se aporta un dictamen pericial realizado por el Perito Néstor Antonio Candamil López. Sin embargo, dicho informe que no puede ser tenido en cuenta como dictamen pericial, puesto que no cumple con los requisitos en el artículo 226 del Código General del Proceso. Los cuales se estudiarán a continuación en contraste con lo allegado en las pruebas documentales en el presente caso, así:

* *Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones:* Si de algo carecen los documentos aportados por la parte actora es de la claridad, precisión y detalle que exige la norma. Como quiera que en ellos únicamente se relacionan unas consideraciones que no se fundamentan bajo ninguna teoría o metodología.
* *Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación:* Del dictamen pericial aportado se concluye con una sola lectura que carece de métodos científicos que permitan establecer la veracidad de lo allí enunciado. Por lo tanto, no cumple bajo ningún supuesto los requisitos exigidos por la norma.
* *Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación:* Del dictamen pericial aportado con la demanda, se concluye con una sola lectura que carece de métodos científicos que permitan establecer la veracidad de lo allí enunciado. Por lo tanto, no cumple bajo ningún supuesto los requisitos exigidos por la norma.
* *Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen:* Del dictamen aportado con la demanda, se vislumbra que el documento e información utilizado para la elaboración de la demanda, consiste únicamente en suposiciones no fundamentadas bajo ninguna metodología. Razón por la cual, se evidencia que el dictamen no cumple en ningún caso los requisitos exigidos por la norma.

Dicho lo anterior, es claro que no se cumplen expresamente todos los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso. Razón por la cual, solicito a su Despacho que el Dictamen Pericial aportado con la demanda, no sea tenido como prueba por faltar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por el artículo 226 del Código General del Proceso.

**De manera subsidiaria**, en el remoto e improbable evento en que el Despacho decidiera tener como prueba tal informe pericial. En virtud de lo preceptuado en el artículo 228 del Código General del Proceso, solicito la comparecencia del perito Néstor Antonio Candamil López, que suscribió la experticia adjunta a la demanda, a la audiencia de Instrucción y Juzgamiento, con el fin de que absuelva, bajo la gravedad de juramento, el interrogatorio acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen que elaboró.

## MEDIOS DE PRUEBA

#### DOCUMENTALES

Solicito se tengan como tales las siguientes, que anexo al presente escrito:

* 1. Copia de Póliza de Seguro de Automóviles No. 4227743, junto con su condicionado particular y general.

#### INTERROGATORIOS DE PARTE

* 1. Comedidamente solicito se cite al señor **JOAQUIN ALFONSO NARANJO DOMINGUEZ**, quien actúa en calidad de demandante, para que absuelva el interrogatorio que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El demandante podrá ser citado en la dirección de notificación que relaciona en su libelo.
  2. Comedidamente solicito se cite al señor **JORGE NARANJO DOMINGUEZ**, quien actúa en calidad de demandante, para que absuelva el interrogatorio que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El demandante podrá ser citado en la dirección de notificación que relaciona en su libelo.
  3. Comedidamente solicito se cite a la señora **MARTHA LUCIA NARANJO DOMINGUEZ**, quien actúa en calidad de demandante, para que absuelva el interrogatorio que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandante podrá ser citada en la dirección de notificación que relaciona en su libelo.
  4. Comedidamente solicito se cite a la señora **NANCY JANETH HINESTROSA GASPAR**, quien actúa en calidad de demandada, para que absuelva el interrogatorio que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandada podrá ser citada al correo [nancyjaneth\_\_1970@hotmail.com](mailto:nancyjaneth__1970@hotmail.com), tal como consta dentro del expediente.
  5. Comedidamente solicito se cite a la señora **PAOLA ANDREA CORDOBA HINESTROZA**, quien actúa en calidad de demandada, para que absuelva el interrogatorio que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandada podrá ser citada al correo [paola.cordobah@hotmail.com](mailto:paola.cordobah@hotmail.com), tal como consta dentro del expediente.

#### DECLARACIÓN DE PARTE

* 1. Conforme a lo establecido en el Art. 198 del Código General del Proceso, solicito se haga comparecer al representante legal de **HDI SEGUROS S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, exclusiones, términos y condiciones de la Póliza de Seguro de Automóviles No. 4227743.

#### TESTIMONIALES

* 1. Respetuosamente me permito solicitar se decrete el testimonio de la doctora **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, identificada con la cédula de ciudadanía 1.061.751.492 de Popayán, asesora externa de mi representada con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda, así como de los fundamentos de hecho y derecho sobre la Póliza de Seguro. Este testimonio se solicita igualmente para que deponga sobre las condiciones particulares y generales de la Póliza, y en general, sobre las excepciones propuestas frente a la demanda.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las características, condiciones, tratativas preliminares, vigencia, coberturas, entre otros, del Contrato de Seguro objeto del presente litigio. La testigo puede ser citada en la Carrera 2 Bis No. 4-16 de Popayán, o en la dirección electrónica [darlingmarcela1@gmail.com](mailto:darlingmarcela1@gmail.com)

#### DICTAMEN PERICIAL

En los términos de los artículos 226 y 227 del Código General del Proceso, se aporta en la oportunidad procesal pertinente el Dictamen Pericial de Reconstrucción de Accidente de Tránsito No. 5826, elaborado por los expertos Ana Isabel Valencia Pérez y William Corredor Bernal, que versa sobre la reconstrucción del accidente de tránsito acaecido en fecha del 22 de septiembre de 2022, en dónde se vio involucrado el vehículo de placas HMM905.

La prueba pericial aportada es conducente, pertinente y útil por cuanto es funcional para verificar desde un punto de vista técnico, los hechos acaecidos el día 22 de septiembre de 2022. Criterio técnico que permite acreditar la ocurrencia y causas del accidente a partir de una óptica científica en uso de la física y otras ciencias aplicadas que permiten reconstruir fielmente las situaciones e hipótesis que rodean el accidente de tránsito el cual es objeto de litigio.

## ANEXOS

1. Todas las pruebas documentales relacionadas en el acápite de pruebas.
2. Poder especial conferido al aquí suscrito conforme lo establece la Ley 2213 de 2022.

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de HDI SEGUROS S.A.

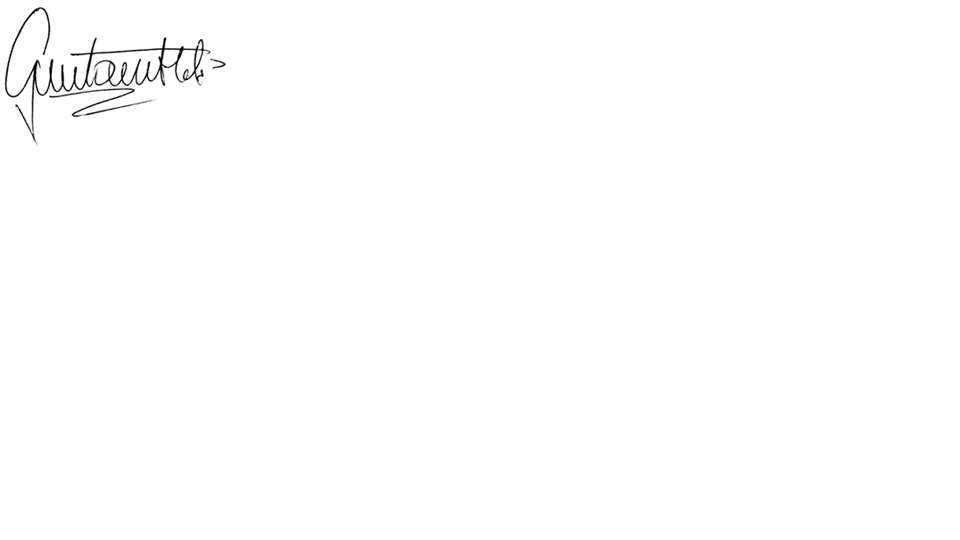
## NOTIFICACIONES

* La parte actora en la dirección consignada en la demanda.
* Por mi representada HDI SEGUROS S.A. se recibirán notificaciones en la Calle 72 No. 10 – 07, Piso 1, de la ciudad de Bogotá D.C.

**Correo electrónico:** [notificaciones.judiciales@hdi.com.co](mailto:notificaciones.judiciales@hdi.com.co)

* El suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35 N - 100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212, de la ciudad de Cali.

**Correo electrónico:** [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D. C.

T.P. No. 39.116 del C. S. J.

1. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC7534-2015. Sentencia del 16 de junio de 2015. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de marzo de 1941.   [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. Expediente 1989-00042 M.P. Arturo Solarte Rodríguez   [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Suprema de Justicia. SC4420-2020. Expediente 2011-00093. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibidem [↑](#footnote-ref-5)
6. Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008. [↑](#footnote-ref-6)
7. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 15 de enero de 2008. Expediente 87300. [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-56742018 (20001310300420090019001), Dic. 18/18. [↑](#footnote-ref-8)
9. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. C.P. Milton Chaves García. Radicación 2018-03357. [↑](#footnote-ref-9)
10. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicación No. 43112. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sentencia de casación civil de 13 de mayo de 2008, Exp. 1997-09327-01. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000-2017- 00405-00. [↑](#footnote-ref-12)
13. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia del 07 de marzo de 2019. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque  [↑](#footnote-ref-13)
14. Álvarez Gómez, Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125. [↑](#footnote-ref-14)
15. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC2482-2019. Radicación n.° 11001-31-03-008-2001-00877-01. Julio 9 de 2019 [↑](#footnote-ref-15)
16. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente 1100131030241998417501. Noviembre 11 de 2004 [↑](#footnote-ref-16)
17. Dice el precepto: “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”. [↑](#footnote-ref-17)
18. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC4527-2020. M.P. Francisco Ternera Barrios. [↑](#footnote-ref-18)
19. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de enero de 2007. Exp. 2000-5492-01. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo. [↑](#footnote-ref-19)
20. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5327-2018. Magistrado Ponente: Luis Alfonso Rico Puerta. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibídem. [↑](#footnote-ref-22)
23. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-23)